

REPENSANDO LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO PIQUETERO

Miseria y experiencias de lucha antes de las
contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino

José Daniel Benclowicz

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y
Universidad Nacional de Río Negro, Argentina*

Resumen: En este trabajo se revisan los principales factores que permiten explicar la emergencia del movimiento piquetero argentino en una de las regiones donde se manifestó más tempranamente: las localidades salteñas de Tartagal y Mosconi. A diferencia de lo que se ha venido afirmando, la idea de la existencia de un estado de bienestar antes de las contrarreformas neoliberales de la década de 1990, y la caracterización del movimiento piquetero, las rebeliones populares (puebladas) y las asambleas populares de la zona como nuevas formas de organización y protesta vinculadas al efecto de las contrarreformas, resultan inadecuados. Con respecto a la primera, se mostrará que nunca existió en la zona algo parecido a un estado de bienestar; sobre la segunda, que existían experiencias de lucha previas dentro de las que el corte de ruta y la Asamblea Popular ya habían sido implementadas, y que esas experiencias nutrieron los acontecimientos posteriores.

INTRODUCCIÓN

El surgimiento del movimiento de trabajadores desocupados o movimiento piquetero en la Argentina es un fenómeno complejo y desafiante políticamente y desde el punto de vista del conocimiento. Antes de su emergencia, importantes científicos sociales planteaban la imposibilidad de que los desempleados constituyeran una fuerza colectiva organizada (véase por ejemplo Rosanvallon, 2007: 193–195). Sin embargo, el movimiento de trabajadores desocupados se desarrolló en casi todo el país y persiste hasta la actualidad.

Su emergencia puede ser situada en el contexto de la desocupación masiva de la segunda mitad de la década de 1990, período en el que empezaron a producirse puebladas en el interior del país y comenzaron a organizarse en distintos puntos agrupaciones de trabajadores desocupados, que exigieron la asistencia del Estado y soluciones para el problema

El presente trabajo contó con el valioso apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Agradezco a los editores y revisores de *LARR*, cuyas observaciones permitieron enriquecer el texto.

del desempleo, y recurrieron al corte de rutas y de calles como una de las principales formas de protesta. Hacia el año 2001, cuando se celebraron la 1ª y 2ª Asambleas Nacionales Piqueteras, el movimiento se encontraba plenamente conformado, y a pesar de la heterogeneidad de orientaciones políticas presentes en su seno, las distintas organizaciones lograron impulsar planes de lucha a nivel nacional que las ubicaron como el principal actor político y social de oposición al régimen del presidente Fernando De la Rúa, cuyo gobierno cayó a fines de ese mismo año.

Distintos investigadores han planteado que la cuna del movimiento se ubica especialmente en los pueblos petroleros de Tartagal y General Mosconi, pertenecientes al departamento General San Martín de la provincia de Salta.¹ En mayo de 1997 esas localidades se convirtieron en escenario de la primera de una serie de puebladas que se producirían en la región,² en las que los desocupados organizados jugaron un papel central, garantizando los cortes de ruta y alentando la realización de asambleas populares masivas que asumieron momentáneamente el control del poder político local. Estos acontecimientos causaron un fuerte impacto en todo el país, incidiendo en la orientación de diferentes organizaciones.

En este trabajo me propongo revisar los principales factores que permiten explicar la emergencia del movimiento piquetero en esas localidades. La necesidad de realizar esta revisión surge del hecho de que hasta el momento, los trabajos sobre el tema han privilegiado el análisis sincrónico y desatendido la historia local, aceptando suposiciones generales que no se ajustan al caso. Al focalizar la mirada en una de las principales zonas donde surgió el movimiento piquetero, es posible acceder a un repertorio de elementos e intervenciones que favorecen la comprensión del origen y las características particulares del fenómeno, además de aportar pistas para indagar acerca del desarrollo del movimiento en diferentes regiones del país.

Desde un punto de vista estructural, el estudio del fenómeno piquetero exige considerar el impacto social producido por las políticas económicas neoliberales implementadas por el gobierno de Carlos Menem. Éste último encabezó el Partido Justicialista (PJ), que cosechó tradicionalmente el apoyo de la mayor parte de los trabajadores del país, y asumió la presidencia en 1989 en el marco de una profunda crisis económica, política

1. Si bien los primeros cortes de ruta y puebladas de la segunda mitad de la década de 1990 se produjeron en las localidades petroleras de Cutral Co y Plaza Huincul, provincia de Neuquén, en esta zona el movimiento de protesta fue cooptado por el Estado en poco tiempo, cosa que no sucedió en Tartagal y Mosconi. Véase, entre otros, Svampa y Percyra (2003) y Auyero (2002).

2. En mayo de 1997, mayo de 2000, noviembre de 2000 y junio de 2001. Considero que se produce una pueblada cuando el orden político es alterado y puesto en cuestión por una rebelión popular de características masivas.

y social.³ El nuevo gobierno, que obtuvo el consentimiento de muchos sectores, incluida una parte no menor del movimiento obrero,⁴ desarrolló un ambicioso programa de reformas estructurales, dentro de las cuales la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue la que más efectos produjo en Tartagal y Mosconi.⁵

Entre 1991 y 1992 se desarrolló el proceso de privatización de la petrolera estatal, a la sombra de la cual se habían desarrollado económicamente ambas localidades. La venta de YPF implicó la desvinculación de 90 por ciento del personal de la zona, y la drástica reducción de la masa salarial que dinamizaba la economía local garantizando la capacidad de consumo (Aguilar y Vázquez 1998). A su vez, la llamada flexibilización laboral —instrumentada principalmente a través de la sanción de la Ley N° 24.013 de Empleo y la reforma de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo—, orientada al abaratamiento de la mano de obra, introdujo el marco legal necesario para que los trabajadores que quedaron empleados por las petroleras sufrieran reducciones salariales e incrementos en la jornada laboral (Aguilar y Vázquez 2000). Por otra parte, la instrumentación de la flexibilización laboral en la administración pública se tradujo en el despido de parte significativa del personal y en la contratación temporaria de trabajadores con salarios inferiores a los de la planta permanente.

De conjunto, es posible afirmar que uno de los principales efectos de las políticas implementadas a lo largo de la década de 1990 fue la drástica alteración de las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo en beneficio del primero. Esta alteración asumió un sentido opuesto al que se había desarrollado en la Argentina hacia la década de 1940 y sostenido de manera general desde entonces. Como es sabido, durante el primer gobierno peronista (1946–1952) se registró una importante reforma social que implicó la extensión de los derechos de los trabajadores a nivel nacional y una significativa redistribución del ingreso (Doyon 1977; Torrado 1994), en función de lo cual buena parte de la bibliografía considera que en ese

3. Entre mayo y junio de 1989 se produjo un espiral hiperinflacionario, registrándose índices del 200 por ciento mensual. Esta situación estuvo acompañada por un creciente desabastecimiento y saqueos a distintos comercios; en ese contexto, el presidente radical Raúl Alfonsín debió entregar el poder seis meses antes de lo previsto al presidente electo Carlos Menem.

4. Para explicar el consenso logrado por el menemismo es preciso tener presente el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura militar de 1976–1983 y los años previos, que golpeó duramente a los sectores internos y externos del peronismo que impugnaban no sólo las políticas neoliberales, sino al propio orden capitalista. Una visión histórica de la hegemonía que logró instaurar el menemismo puede verse en Bonnet (2007).

5. La venta de la petrolera estatal fue implementada a partir de la sanción de la Ley N° 23.696/89 de Reforma del Estado, que autorizó las privatizaciones

período se inauguró un estado benefactor, que fue desmontado definitivamente durante la década de 1990.

Casi todos los autores que han tratado el tema del movimiento piquetero de Tartagal y Mosconi adoptan esa perspectiva y parten de la idea de la existencia de un estado de bienestar o distribucionista antes de la implementación de estas políticas. Así, si bien en general se señala que YPF propició una sociedad con sectores diferenciados, se supone que todos ellos gozaban directa o indirectamente de cierto nivel de bienestar: las relaciones sociales propiciadas por YPF antes de su privatización en las regiones en las que operaba fueron consideradas como el modelo por excelencia del estado benefactor argentino. En esa línea, las contrarreformas neoliberales de la década de 1990 —especialmente la privatización de YPF— habrían provocado el desmantelamiento definitivo de ese tipo de estado, y ese hecho habría llevado, después de algunos años, a la pobreza e indignancia a la mayor parte de los pobladores de la zona. (Entre los trabajos que suponen la acción previa en la zona de un estado benefactor o distribucionista, véase Svampa y Pereyra 2003; Barbeta y Lapegna 2001; Márquez 2004; Barbeta y Bidaseca 2004; Pereyra 2006; Andujar 2007; Dinerstein Contartese y Deledicque 2008; Schaumberg 2004; Benítez Larghi y Sabbatella 2006).

La rapidez con la que operaron las transformaciones económicas, sumada a la influencia de distintos conflictos locales y extra locales hacia 1997, explican en buena medida, de acuerdo a estos trabajos, la emergencia de un fenómeno que habría implicado una profunda ruptura con las tradiciones políticas previas en la zona: el del movimiento piquetero.⁶ Las puebladas, los cortes de ruta y las asambleas populares constituirían, siguiendo este esquema, nuevas formas de protesta y organización.⁷ Algunos investigadores llegaron a plantear, incluso, que antes de ese momento no se habían producido acciones colectivas en la región (Aguilar y Vázquez 1998, 2000; Córdoba, 2004).

Los trabajos mencionados, que tocan específicamente el tema del norte salteño, pueden ser enmarcados dentro de una perspectiva de análisis

6. Svampa y Pereyra (2003) distinguen la situación de los pueblos petroleros del interior del país, en los que se habrían producido las novedades en las formas de organización y lucha, de la del Gran Buenos Aires, donde registran una continuidad con tradiciones de lucha previas.

7. Resulta interesante señalar que esta idea de novedad radical desde el punto de vista estructural y político aparece tanto en textos que recurren con diferentes matices a las categorías provistas por las teorías de la acción colectiva y de los nuevos movimientos sociales para analizar el movimiento piquetero (véase especialmente Barbeta y Lapegna 2001), como en aquellos que lo piensan como parte del conflicto entre trabajo y capital (véase, por ejemplo, Dinerstein, Contartese y Deledicque 2008). En el primer caso se enfatiza la heterogeneidad social presente en las protestas, mientras que en el segundo se remarcan los elementos clasistas, pero en ambos el fenómeno supone el desarrollo de una nueva tradición de organización y luchas.

más general, de características sincrónicas, que tiene en cuenta el modo en que las políticas de la década de 1990 modificaron los intereses materiales, las oportunidades políticas y las formas de organización (Auyero 2002).⁸ Esta perspectiva ha aportado valiosos elementos para pensar el ciclo de protestas en el que se puede enmarcar el fenómeno piquetero, pero no incorporó realmente al análisis la influencia de la historia local.

Otros autores, sin dejar de reconocer el profundo impacto de esas políticas y la novedad que implicó la conformación de un movimiento de trabajadores desocupados masivo y de notable influencia, han insistido, desde una mirada histórica, sobre la existencia de una estrecha relación entre el fenómeno piquetero y las tradiciones de lucha obrera del pasado, señalando la continuidad entre los piquetes en los lugares de trabajo —que en la Argentina se registran desde finales del siglo XIX—, y los piquetes realizados en las rutas y otras vías de comunicación por trabajadores desocupados y ocupados (véase, entre otros, Lucita 2001; Maceira y Spatberg 2001; Oviedo 2001). Sin embargo, esta hipótesis ha sido escasamente acompañada hasta el momento por indagaciones empíricas.

Para contribuir en ese sentido, el presente trabajo adopta una mirada histórica recurriendo a la evidencia empírica. Sobre la base del análisis de fuentes estadísticas, publicaciones periódicas y entrevistas a informantes clave, en las líneas que siguen se exponen las razones por las que tanto la idea del quiebre del estado benefactor, como la del surgimiento de nuevas formas de organización y protesta, resultan inadecuadas. Con respecto a la primera, se mostrará que nunca existió en la zona algo parecido a un estado de bienestar; sobre la segunda, que existían un conjunto de experiencias de lucha previas dentro de las que el corte de ruta como forma de protesta y la Asamblea Popular como forma organizativa ya habían sido implementadas. En este sentido, se busca desarrollar una perspectiva que vaya más allá del contexto de la década de 1990 en el que se sitúa la bibliografía académica sobre el tema, y que aporte elementos para pensar la emergencia del fenómeno piquetero teniendo en cuenta la historia local y argentina.

El artículo está organizado del siguiente modo: en el primer apartado reviso la cuestión del estado benefactor, teniendo en cuenta especialmente la información estadística sobre la situación social, disponible a partir de 1980; en el siguiente analizo las características y la situación de la clase obrera antes de las contrarreformas neoliberales; en el tercero examino el impacto de estas últimas; en el cuarto considero distintas experiencias de

8. Dentro de esta perspectiva existen orientaciones disímiles: a la hora de considerar los intereses y las oportunidades políticas de la protesta y de la organización de las agrupaciones piqueteras, algunos autores enfatizan la cuestión del clientelismo que caracterizaría a la relación entre estas últimas y el poder político (Ponce 2006); otros las alianzas con sectores de izquierda (Alcañiz y Scheier 2007).

lucha previas a las protestas que adquirieron visibilidad a partir de 1997, y propongo a partir de ahí un nuevo enfoque para pensar la emergencia del movimiento piquetero.

RASGOS SOCIALES ESTRUCTURALES DEL PERÍODO PREVIO A LAS CONTRARREFORMAS NEOLIBERALES

Transcurrieron veinticinco años desde que concluyó el primer período peronista (1955) hasta la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, donde se comenzaron a registrar datos específicos sobre la situación social en las distintas localidades del país. A partir de ese momento, los censos estimaron la cantidad de población indigente o con necesidades básicas insatisfechas (NBI). En 1980, 58 por ciento de la población del departamento de General San Martín, donde se encuentran Tartagal y Mosconi,⁹ no lograba satisfacer sus necesidades básicas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC] 1980). Las estadísticas muestran una leve mejoría durante la década siguiente en todo el país (cuadro 1 y gráfico 1).

Como se puede ver, en ambos períodos Salta excede holgadamente la media nacional de NBI, llegando casi a duplicarla. En 1991 es la provincia con mayor índice de hogares con NBI del país, y la segunda después de Formosa considerando la población total con NBI (INDEC 1991). El departamento General San Martín supera los ya elevados índices de la provincia. A su vez, el mismo indicador registra cifras más bajas en Mosconi, que concentraba mayor cantidad de trabajadores de YPF que Tartagal.

Salta percibe, además de la coparticipación federal que gira el estado nacional, parte de la renta petrolera, por lo que difícilmente pueda considerarse una provincia pobre desde el punto de vista económico.¹⁰ Por su parte, el departamento General San Martín, donde se centra la actividad petrolera provincial, registra índices de insatisfacción que superan los promedios generales, lo que indica que la extensión de la indigencia no responde a la falta de recursos económicos, sino a la casi inexistente redistribución de estos últimos.

9. Tartagal y Mosconi son las principales localidades del departamento General San Martín, donde se concentra la producción petrolera de Salta. Tartagal es la ciudad cabecera y en 1991 tenía 43.586 habitantes, la población de Mosconi ascendía en ese momento a 12.600. Entre las dos reúnen a más de la mitad de la población departamental, calculada en 106.688 (INDEC 1991).

10. Entre 1984 y 1991, el período previo a la privatización de YPF, Salta recibió un promedio anual de 69.330.938 de dólares estadounidenses por ese concepto, equivalente a más de 28 por ciento de los recursos corrientes de la provincia aportados por la nación durante ese período. Estimación propia en base a los datos de las ejecuciones presupuestarias de la provincia de Salta, compilados en Antonelli y Laronte (1995, 9) y en Antonelli (1996, 11).

Cuadro 1 Población con NBI

Año	Argentina	Salta	Dto. G.S. Martín	Tartagal	Mosconi
1980	24	43	58	53	44
1991	19	37	47	45	33

Nota: Porcentajes correspondientes al total del país, a la provincia de Salta, al departamento General San Martín, a Tartagal y a Mosconi (1980 y 1991).

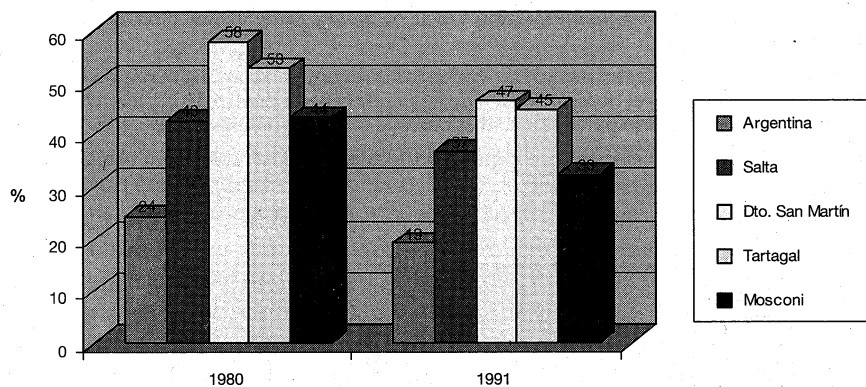


Gráfico 1 Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1980-1991

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 1980 y 1991.

Si se examinan con más detalle los indicadores sociales, en especial los vinculados al desarrollo de infraestructura, se puede confirmar que los niveles de redistribución de los ingresos han sido extremadamente bajos durante la segunda mitad del siglo XX. El cuadro 2 y el gráfico 2 muestran la situación de las viviendas hacia 1991, antes de que se produzcan los efectos de las contrarreformas neoliberales.

Los porcentajes que figuran en el cuadro 2 confirman que Salta se ubica entre las provincias más pobres desde el punto de vista social; y que más severas aún son las condiciones de vida que imperan en el departamento General San Martín, de donde se extrae la mayor parte del petróleo y el gas de Salta. Como se ve, 44 por ciento de las viviendas no pueden acceder al gas; el hidrocarburo sigue su curso hacia el sur, hacia la capital provincial primero, y después hasta Buenos Aires. Otro tanto se puede decir de la electricidad: a pesar de la sobreabundancia de fuentes de energía, casi 30 por ciento de las viviendas no están conectadas al sistema eléctrico. En la mayoría de los casos —más de 60 por ciento—, aún contando con luz y gas, las viviendas son deficitarias; y 25 por ciento son precarias. No es posible atribuir esas condiciones a la evolución de la situación social durante la década de 1980: en la etapa previa, como se mostró más arriba, las

Cuadro 2 *Viviendas con carencias de infraestructura*

Tipo de carencia	Salta	Dto. G.S. Martín
Sin electricidad	21,8	29,9
Sin gas de red ni envasado	28,9	44,0
Deficitarias ^a	47,3	60,6
Precarias ^b	20,5	25,6

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 1991.

Nota: Porcentajes correspondientes a la provincia de Salta y al departamento General San Martín, 1991.

^aIncluye a las viviendas precarias y a las viviendas que cumplen con una o más de las siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, tienen piso de tierra u otro parecido, no disponen de retrete con descarga de agua.

^bIncluye ranchos o casillas, piezas de inquilinato, locales no construidos para habitación y viviendas móviles.

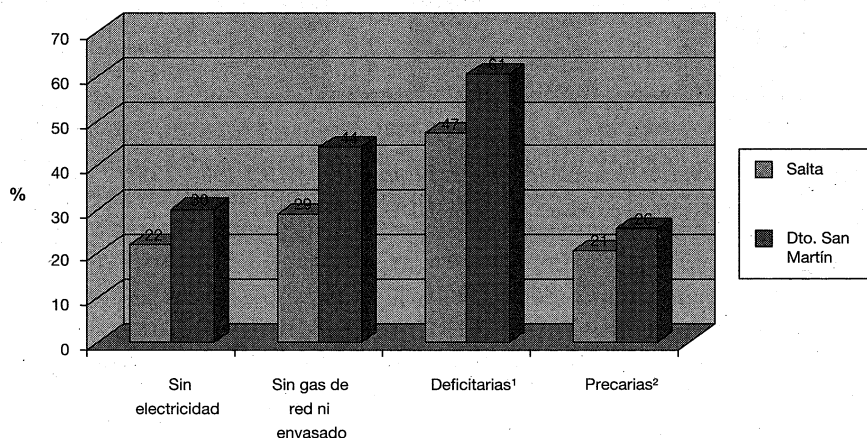


Gráfico 2 *Viviendas con carencias de infraestructura, 1991*

condiciones de vida fueron más severas. Por ejemplo, hacia 1980, en toda la provincia, 56 por ciento de las viviendas eran deficitarias, y 34,3 por ciento no contaba con electricidad; en el departamento General San Martín, las deficitarias alcanzaban 69,6 por ciento, y 44,1 por ciento no tenía luz eléctrica (INDEC 1980).

LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA

El examen desarrollado hasta aquí considera a la población en general. Para examinar la emergencia del movimiento de trabajadores desocupados,

Cuadro 3 Población ocupada según categorías censales en el departamento General San Martín, 1991

	Obrero o empleado			Trabajador		Patrón	Ignorado	Total
	Sector público	Sector privado	Servicio doméstico	por cuenta propia	Trabajador familiar			
Nº	8.323	8.840	3.402	9.844	2.610	1.009	146	34.174
%	24,4	25,9	10,0	28,8	7,6	3,0	0,4	100,0

Fuente: INDEC 1991.

interesa también atender específicamente a la situación de la clase obrera, y al lugar que ocupa en el conjunto social.¹¹ El censo de 1991 calcula una población económicamente activa (PEA) de 36.452 personas para el departamento General San Martín. De ellos, 34.174 habrían estado ocupados y 2.278 desocupados. La población económicamente inactiva (PEIA) ascendía, según los datos, a 29.252. Dentro de esta última categoría, el censo distingue jubilados o pensionados, estudiantes, u otra situación. No deja de llamar la atención que este último ítem esté integrado por la mayoría de las personas consideradas económicamente no activas. En efecto, 17.289 personas, 59 por ciento, corresponden a otra situación. Lo abultado de la cifra sugiere fuertemente que tal ítem esconde un importante número de trabajadores desocupados o subocupados (cuadro 3).

Para evaluar el peso de la clase obrera en la sociedad, es necesario hacer algunas aclaraciones previas, dado que las categorías censales son reacias a ese propósito. Primero, como ya señalé, es posible pensar que buena parte de la población considerada económicamente no activa integra, en realidad, la clase trabajadora, en calidad de desocupada. Por otra parte, debe profundizarse sobre las categorías trabajador por cuenta propia y trabajador familiar (es decir, sin ingresos). La primera comprende distintos sujetos según las características de cada lugar: en las ciudades más diversificadas y desarrolladas económicamente corresponden a ella cierto número de profesionales independientes, entre otros sujetos que pueden ser considerados de clase media. El peso de la clase media censada en esa categoría disminuye en ciudades con un menor índice de desarrollo como Salta capital, y se reduce notoriamente en nuestra zona, donde el número de profesionales autónomos es limitado y la clase media es reducida. De esto se deduce que en el departamento General San Martín la categoría en cuestión, dentro de la que se incluye a 28,9 por ciento de la PEA, corresponde en buena medida a trabajadores que no tienen un

11. Para facilitar el análisis, y teniendo en cuenta que Tartagal y Mosconi las principales localidades del departamento General San Martín, se toman los datos departamentales.

Cuadro 4 Cobertura de salud de "obreros y empleados" del departamento General San Martín, 1991

Tipo de cobertura	Sector público	Sector privado	Servicio doméstico	Totales
Obra social	7.492	3.189	379	11.060
Plan médico o mutual	26	99	30	155
Sin cobertura	781	5.431	2.898	9.110
Ignorado	0	0	240	240
Totales	8.299	12.266	3.547	20.565

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 1991.

empleo fijo, y viven de changas.¹² Otro tanto se puede decir de los trabajadores familiares (7,7 por ciento de la PEA) que trabajan sin recibir remuneración.

Dicho esto, nótese que sólo el 3 por ciento de la PEA está incluida en la categoría patrones, por lo cual no es difícil concluir que el peso de la clase obrera en la zona es central. Ahora bien, dentro de ella es posible distinguir dos sectores claramente diferenciados: aquellos que accedían efectivamente a los derechos sociales que fueron conquistados a partir de la etapa peronista, y aquellos que no. A partir de la interpretación de los datos del censo, es posible aproximarse a una cuantificación de cada uno.

Una forma de estimar el acceso a esos derechos es atendiendo a la extensión de la cobertura de salud. El Censo de Población de 1991 informa sobre la situación de parte de los trabajadores, los que figuran como obreros o empleados (cuadro 4).

Una rápida mirada al cuadro permite advertir la muy elevada cifra de los trabajadores que no tienen cobertura, aunque es algo superior la cantidad de los que sí la tienen. Más adelante mostraré que en un cálculo más realista, los primeros superan ampliamente a los últimos. Antes de eso, vale la pena detenerse en otro aspecto significativo. Nótese que el grueso de los trabajadores que tienen cobertura pertenecen al sector público, y la mayoría de los que carecen de ella se ubican en las otras dos categorías. Lo que está indicando el dato es que los trabajadores del estado (administración pública, sistema educativo y de salud y empresas estatales), que generalmente tienen una relación laboral estable,¹³ ejercían salvo algunas

12. Contratación informal de corta duración para realizar una tarea específica —en muchos casos por un día o algunas horas—, que generalmente apenas permite reproducir las condiciones de existencia del trabajador.

13. Adviértase de todos modos los más de setecientos trabajadores del sector público sin cobertura, que indican a su vez que también el Estado empleaba trabajadores en condiciones precarias.

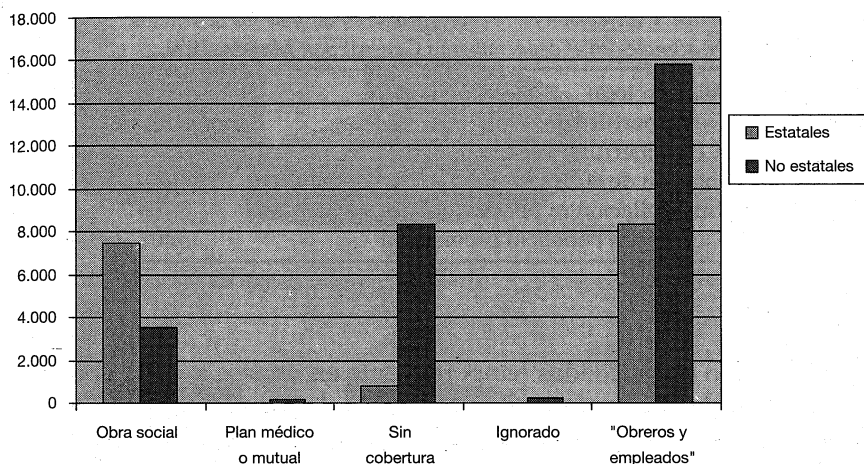


Gráfico 3 Cobertura de salud de "obreros y empleados" estatales y no estatales del departamento San Martín, 1991

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 1991.

excepciones los derechos sociales, y el resto (vinculados a la explotación forestal y agraria, y al comercio y servicios urbanos), sometido a condiciones de precariedad laboral, no.

Este hecho marca una clara línea divisoria que se expresa en las condiciones de existencia, diferentes para cada caso. Es preciso entonces, distinguir a los trabajadores estatales del resto. El gráfico 3 agrupa a los obreros y empleados del censo en función de ese criterio.¹⁴

El gráfico muestra con total claridad que el grueso de los trabajadores que carecen de cobertura de salud —más de ocho mil— son los que no trabajan para el Estado. Mientras este sector quedó fuera del sistema de seguridad social, la mayor parte de los estatales estaba dentro de él. Pero hay otra cuestión, no menos significativa, que se puede visualizar. El sector informal —casi dieciséis mil trabajadores— duplica prácticamente al sector estatal. Al contrario de lo que se suele suponer, no era el empleo público lo que predominaba en Tartagal, Mosconi y el departamento General San Martín, sino el empleo precario e informal, bajo condiciones de superexplotación.¹⁵

Dentro de este último grupo, los obreros forestales y rurales eran los que estaban expuestos a los más altos niveles de superexplotación. Gene-

14. De hecho, ya el censo de 2001 procede de esta misma forma.

15. Tomo el concepto de Marini (1991). Implica una explotación de la fuerza física del trabajador superior a la media, y se expresa en una remuneración de la fuerza de trabajo inferior a su valor, que impone severas condiciones de existencia.

Cuadro 5 Extensión de la cobertura de salud y de los beneficios previsionales en el departamento General San Martín, 1991

Población total	106.688
Sin cobertura de salud	63.373
Con cobertura de salud	43.315
Población de 60 años y más	6.862
Sin jubilación ni pensión	3.760
Con algún beneficio previsional	3.102

ralmente eran enganchados temporalmente en obrajes y en la época de cosecha, por lo que conformaban una masa de desocupados crónicos el resto del año. En 1973, las denuncias por la situación de los peones rurales llegaron a la Cámara de Diputados de la provincia, donde se pusieron en evidencia las condiciones infrahumanas de hacinamiento a las que eran sometidos los trabajadores temporales, además de la continuidad del sistema de libreta, que redundaba en la expropiación del salario (Cámara de Diputados de Salta 1973, 160–161).¹⁶

La extensión del empleo precario en general puede estimarse con mayor aproximación si se tiene en cuenta a los trabajadores por cuenta propia, categoría que como ya se argumentó, corresponde en buena medida a trabajadores que viven de changas, y para quienes el censo no mide la cobertura de salud. Lo mismo vale para la categoría de los trabajadores familiares. Lamentablemente resulta imposible calcular, sin caer en un análisis altamente especulativo, el porcentaje de esas categorías que corresponde a trabajadores informales. Es aquí donde resulta necesario atender una vez más a los datos referidos al conjunto de la población, teniendo en cuenta el peso predominante de la clase obrera. El cuadro 5 y los gráficos 4 y 5 permiten terminar de ilustrar el escaso nivel de desarrollo de los derechos sociales en la etapa previa a las contrarreformas neoliberales tomando como variable, además de la cobertura de salud, el acceso a beneficios previsionales.

Los gráficos muestran expresivamente la fractura social predominante en la zona bajo estudio. Atendiendo una vez más a la cobertura de salud,

16. Este sistema sufrió escasas alteraciones desde principios del siglo XX, se basa en la compra a cuenta del salario de alimentos y otros bienes necesarios para la subsistencia, que se anotan en la libreta. Como en general los establecimientos se encuentran alejados de los centros de aprovisionamiento, el dueño o el concesionario instalan almacenes donde los trabajadores se ven obligados a comprar mercaderías a precios elevados, y al final del período de contrato no es extraño que su salario resulte nulo, o incluso que deban dinero. Para ampliar sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos sectores, se puede ver Cafferata (1988).

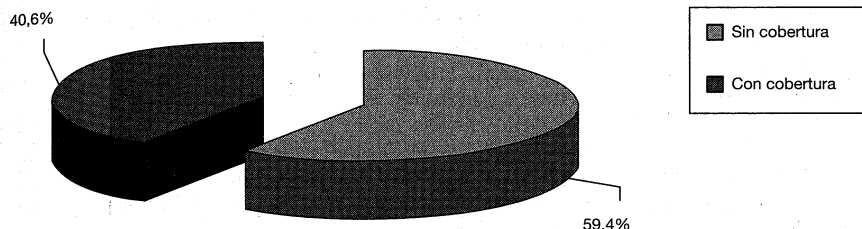


Gráfico 4 Población del departamento San Martín según su acceso a cobertura de salud, 1991

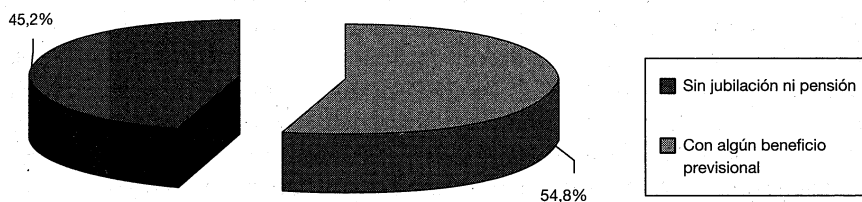


Gráfico 5 Población de 60 años o más del departamento San Martín según su acceso a beneficios previsionales, 1991

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 1991.

resulta que 59,4 por ciento de la población del departamento no contaba con ella hacia 1991; a su vez, 54,8 por ciento de las personas mayores de sesenta años no contaban con jubilación ni pensión, superando una vez más los altos promedios provinciales.¹⁷ Estos datos plantean la necesidad de abandonar la idea de un estado benefactor: confirman concluyentemente la existencia de un vasto sector de la clase obrera que no tuvo acceso a los beneficios sociales que tenían los trabajadores estatales, y que estuvo sometido a severas condiciones de vida. En este sentido, es posible afirmar que la propia clase obrera estaba fracturada y polarizada entre los trabajadores estatales y el resto, donde predominaba el empleo precario y temporal. Más acá de las estadísticas, la existencia de esa diferenciación entre los trabajadores que se desempeñaban en las empresas o dependencias del Estado y el resto aparece también en distintas entrevistas:

Y [. . .] debo decir que no hay nada que envidiarle al convenio colectivo de YPF porque también Agua y Energía era una empresa del Estado que gozaba de uno de los convenios colectivos de trabajo mas importantes [. . .]

17. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991, 48,7 por ciento del total de la población salteña no tenía cobertura de salud y 40,3 por ciento de los mayores de sesenta años no tenía ningún beneficio previsional (INDEC 1991).

Pregunta: ¿Los sueldos, cómo eran en esa época de Agua y Energía?

Respuesta: No, eran muy importantes . . .

P: ¿Y los del resto?

R: No, el resto era insuficiente [. . .] ganaba apenas para . . .

P: O sea que las que pagaban buenos sueldos . . .

R: Eran las empresas del Estado [. . .] se notaba la diferencia entre los hijos de los trabajadores de estas empresas con el resto de la población . . . (José "Pepe" Barraza, dirigente piquetero y ex trabajador de la empresa estatal de Energía, entrevista del autor, Tartagal, junio de 2005).

Los ypefianos¹⁸ lograron obtener las mejores condiciones de trabajo y de vida, aún dentro de los estatales. Distintos autores han destacado el conjunto de beneficios sociales que conquistaron los trabajadores de YPF en el primer período peronista (Solberg, 1986: 243; Svampa y Pereyra, 2003: 103). Con el apoyo de Perón, la Federación de Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado (SUPE) logró importantes aumentos de salarios directos —que se mantuvieron por debajo de la media nacional, de por sí bastante pobre, en el período anterior—, y mejoras en las condiciones de trabajo. Sin embargo, es necesario apuntar que buena parte de la acción social y cultural que beneficiaba a los trabajadores de la empresa estatal existía con anterioridad al peronismo.

Así, a finales de la década de 1930 los trabajadores permanentes de la cuenca salteña —y de las demás dependencias— habían conquistado beneficios que se suelen considerar propios de un estado de bienestar. Contaban con seguro de salud, bonificaciones por paternidad, maternidad, antigüedad y eficiencia, y un seguro colectivo de vida. El acceso a los bienes de consumo se había visto facilitado a través de la instalación de proveedurías para empleados y obreros que vendían mercaderías a precio de costo, y mantenían en funcionamiento comedores económicos. El acceso a la educación también fue asegurado por la petrolera estatal, mediante la construcción de escuelas y el financiamiento de distintos cursos gratuitos para los hijos de sus empleados (YPF 1938a, 191–197; 1938b, 3–13; 1939, 81–83). Esas prestaciones tendieron a ampliarse durante la segunda mitad del siglo XX, y se mantuvieron hasta la privatización de la empresa, en 1992.

Al pensar en un estado de bienestar los investigadores han observado únicamente al sector obrero que mejores condiciones de vida había logrado, sin atender a la grave situación en la que se encontraba más de la mitad de los trabajadores de la zona. Teniendo en cuenta el contraste entre las condiciones de vida de los ypefianos en particular y los estatales en general con respecto a la de los trabajadores empleados en condiciones precarias, resulta pertinente considerar de manera diferencial el efecto que causaron las contrarreformas neoliberales sobre cada sector.

18. Denominación con la que se designa en la zona a los trabajadores de YPF.

IMPACTO DIFERENCIAL DE LAS CONTRARREFORMAS NEOLIBERALES

Los efectos estructurales a nivel empleo de las contrarreformas fueron contundentes en todo el país. Salta, hacia 1991, al comienzo del proceso, registraba una tasa de 6 por ciento de desocupación, similar a la del departamento General San Martín, de 6,2 por ciento. Diez años después, el departamento al que pertenecen Tartagal y Mosconi exhibía una tasa de 33,7 por ciento de desempleo (INDEC 1991, 2001), lo que implica un aumento de más del 540 por ciento de la desocupación. Comparada con el promedio provincial, que pasó a 29,2 por ciento, la tasa de General San Martín se ubicaba 4,5 puntos por encima. En 1997, tras la pueblada que se produjo ese año, el gobierno provincial realizó un estudio sobre la situación ocupacional en las principales localidades del departamento General San Martín. En Tartagal y en General Mosconi, la desocupación total, que surge de sumar la tasa desocupación pura —es decir, los trabajadores que no logran emplearse en ninguna tarea remunerativa— y la de subocupación —trabajadores que realizan changas— eran de 32,7 y de 42,6 por ciento respectivamente. El peor escenario se presentaba en Mosconi, donde vivían la mayor parte de los trabajadores petroleros; allí los índices eran más elevados que en Tartagal. En esta última localidad el desempleo era mayor que en Salta capital, que una vez más superaba los promedios nacionales (cuadro 6 y gráfico 6).

Se puede reconocer fácilmente que el conjunto de transformaciones sociales de los años 90, entre las que sobresalen las consecuencias de la privatización de YPF, impactaron fuertemente en Tartagal y en Mosconi. Pero su efecto no fue idéntico para toda la población. Para los trabajadores estatales en general, y los ypefianos en particular, implicaron una transformación drástica y vertiginosa de su forma de vida. La estabilidad laboral del sector público desapareció, y junto a ella los ingresos corrientes, la capacidad de consumo y la previsibilidad de la vida cotidiana. Buena parte de los marcos de referencia de esos trabajadores virtualmente desaparecieron: ya no era posible conseguir trabajo y las carencias materiales se incrementaban de manera inconcebible para sujetos que no estaban acostumbrados a ellas ni estaban dispuestos a aceptarlas. El profundo cambio de relaciones sociales que implicó la desocupación, y el progresivo hundimiento en la indigencia se impusieron frente al vívido recuerdo de un pasado inmediato que se ubicaba en las antípodas de la situación que ahora vivían. En ese contexto, la opresión social a la que se veían sometidos se les presentó translúcidamente. El impacto también fue muy importante en el sector comercial: la rápida transformación de la estructura económica dejó a buena parte de los pequeños y medianos comerciantes al borde de su destrucción como clase social. Para los sectores superexplotados de larga data, la situación empeoró notoriamente después de las contrarreformas, pero el impacto subjetivo fue induda-

Cuadro 6 *Desocupación absoluta, subocupación y desempleo total en Tartagal, Mosconi, Salta capital y Argentina, 1997*

	Desocupación	Subocupación	Desempleo total ^a
Tartagal	18,1	14,6	32,7
Mosconi	17,2	25,4	42,6
Salta capital	14,3	14,9	29,2
Argentina	13,7	13,1	26,8

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadísticas de Salta 1997 e INDEC 1997.

^aEl desempleo total surge de la suma de las tasas de desocupación y subocupación.

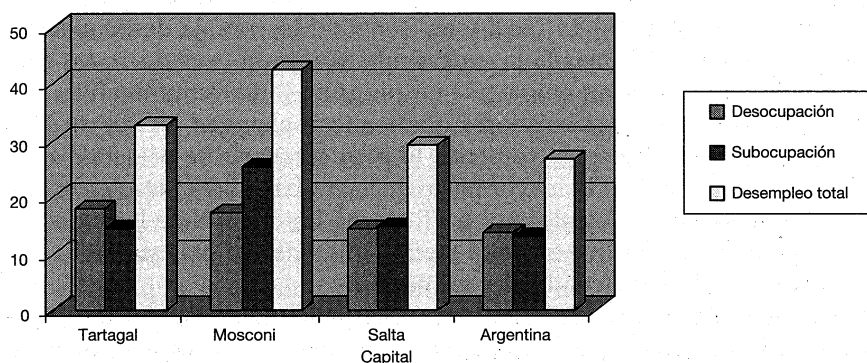


Gráfico 6 *Índices de desocupación, subocupación y desempleo total en Tartagal, Mosconi, Salta Capital y Argentina, 1997*

blemente menor que en el caso de los trabajadores estatales. Su pasado ya tenía importantes dosis de indigencia, y su inestabilidad laboral era permanente.

Otra diferencia, por lo menos igual de relevante que la anterior, distinguía a ambos sectores de trabajadores. Los estatales y sobre todo los ypefianos tenían una importante experiencia de organización y de luchas. No casualmente, los dirigentes de las principales organizaciones de desempleados fueron estatales: tal es el caso de José "Pepe" Barraza, trabajador de la ex empresa pública de Agua y Energía, y principal referente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) de Tartagal. En el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), la agrupación más importante de la zona, todos sus dirigentes, entre los que se destacaron Juan Nievas, José "Pepino" Fernandez y Rodolfo "Chiqui" Peralta, son ex ypefianos. Por su parte, los trabajadores informales tuvieron sus primeras experiencias de organización y de lucha bajo la dirección de estos últimos en el movimiento piquetero.

LA EXPERIENCIA DE LUCHA

En general, los primeros grandes cortes de ruta contra las políticas neoliberales que son tenidos en cuenta por los investigadores son los de las localidades neuquinas de Cutral Co y Plaza Huincul, en junio 1996 y abril de 1997. Ambos cortes, que derivaron en sendas puebladas, otorgaron visibilidad a nivel nacional a esos pueblos petroleros de sur, igualmente afectados por la privatización de YPF y las contrarreformas impulsadas por el menemismo, y se convirtieron en modelos a seguir por distintos sectores golpeados por el ajuste económico. En Tartagal y Mosconi, donde al igual que en las localidades neuquinas la privatización de YPF y las medidas económicas habían impactado fuertemente, no pasaron desapercibidas las protestas que se produjeron en el sur del país; un mes después del segundo gran corte de ruta de Cutral Co y Plaza Huincul estalló el Tartagalazo-Mosconazo de 1997, donde el movimiento inició un curso de desarrollo creciente e independiente del Estado, cosa que no ocurrió en Neuquén. Pero el corte de ruta como forma de protesta de los trabajadores no era totalmente novedoso en la región.

Lejos de los planteos que suponen la ausencia de luchas antes de 1997, y también de los que postulan la emergencia de nuevas modalidades de organización y de protesta, la historia de Tartagal y Mosconi presenta una frondosa tradición combativa, en la que los trabajadores de YPF, encabezados por distintos sectores de izquierda, jugaron un papel destacado. Esa tradición incluye un conjunto de experiencias de lucha, algunas de las cuales presentan una continuidad evidente y cuyos formatos son exactamente los mismos o anticipan a los más recientes.¹⁹ Por razones de espacio, en estas líneas sólo menciono diferentes protestas que se desarrollaron a finales de la década de 1980, y ofrezco una ajustada síntesis de la primera pueblada de la zona, que se produjo varios años antes de 1997 y hasta el momento había pasado inadvertida.²⁰

Las principales luchas de finales de la década de 1980 en la región están vinculadas al rechazo de la política petrolera del gobierno de Raúl Alfonsín. En 1985 el gobierno radical (de la Unión Cívica Radical [UCR], partido al que pertenecía Alfonsín) instrumentó el Plan Houston,²¹ que ofertó al

19. La influencia de las experiencias de lucha del pasado en las acciones del presente es reconocida por escuelas disímiles. Por ejemplo, desde una perspectiva vinculada a teoría de la lucha de clases, Thompson (1989) se refiere a las tradiciones subterráneas que alimentan la organización y las luchas de los trabajadores; desde las teorías de la acción colectiva, Tarrow (1997), entre otros, señala que los actores cuentan con un repertorio histórico de formas de protesta.

20. Una descripción detallada del contexto en que se desarrollaron estas protestas se puede ver en Benclowicz (2010).

21. El llamado Plan Houston, impulsado a través del Decreto N° 1.443/85, fue complementado por el Decreto N° 1.758/87 (Plan Huergo) y el N° 1.812/87 (Plan Olivos I). Véase Presidencia de la Nación (1985, 1987a y 1987b), respectivamente.

capital privado 165 áreas para la exploración y la explotación. Tres años más tarde, ante el fracaso de esa política, el presidente Alfonsín impulsó el Petroplan, que planteaba la creación de uniones transitorias de empresas para la explotación en las áreas marginales, la creación de *joint ventures* de YPF con el capital privado en las áreas centrales y la desregulación del mercado petrolero.

En la zona bajo estudio se desarrollaron importantes protestas encabezadas por los trabajadores de YPF en rechazo de ese proyecto. Una de las acciones de lucha más radicalizadas de ese período fue el corte de pista del aeropuerto de Mosconi, al que debían arribar autoridades de YPF y del gobierno. En esa oportunidad, los trabajadores petroleros se declararon en huelga de hecho, y tras una jornada completa de manifestaciones que atravesaron las calles de Mosconi y las distintas dependencias de YPF, el martes 14 de junio de 1988 centenares de trabajadores petroleros instalaron un enorme piquete en la pista de aterrizaje. Esperaban el arribo de autoridades que debían inspeccionar las instalaciones de las áreas comprometidas en el Petroplan. El avión que los transportaba pudo aterrizar, pero una vez que se detuvo fue rodeado por los trabajadores. Los funcionarios no pudieron desembarcar, y fueron forzados a retirarse sin cumplir con su propósito (*El Tribuno* 1988; *Prensa Obrera* 1988a).

Resulta significativo señalar que esta experiencia de lucha, entre otras, forma parte de la historia militante de los actuales dirigentes piqueteros. Así, no sólo desde el punto de vista de las formas de protesta —en este caso, el corte de pista— sino también considerando los actores que intervienen, las puebladas y los cortes de ruta evidencian una continuidad insoslayable con las luchas previas.²²

Con todo, a pesar de la importancia de esta virtual toma del aeropuerto de Mosconi, pocos hablan de esa acción. En este sentido, uno de los testimonios sugiere que la derrota sufrida tras la privatización de YPF favoreció esa reserva.

22. Vale la pena mencionar que esta continuidad se remite a su vez a experiencias de lucha obrera anteriores a las de finales de los ochenta y principios de los noventa. Distintos activistas que participaron de la lucha contra la privatización de YPF evocan, al ser entrevistados, acciones previas. El caso más lejano en el tiempo que aparece es el de “La huelga de los 42 días”, que se desarrolló en 1961 contra la política de racionalización ferroviaria del presidente Arturo Frondizi, y en el curso de la cual que confluyeron tanto los trabajadores de ese sector como los petroleros de la zona bajo estudio (entrevistas del autor a L., ex trabajador de YPF, justicialista disidente y dirigente de la lucha contra la privatización de esa empresa, Mosconi, diciembre de 2008, y a A., ex trabajador de YPF, ex militante del Partido Comunista, y miembro fundador de la UTD, Mosconi, diciembre de 2008). Existen registros de que en esa oportunidad, el piquete, que forma parte de la tradición del movimiento obrero, jugó un papel central para garantizar la medida de fuerza (véase *El Tribuno* 1961). Lo que resulta notable es que los entrevistados eran niños o adolescentes por ese entonces, lo cual indica el desarrollo de una cultura en común, de la que nutrió el actual movimiento piquetero.

[T]omamos el aeropuerto en un momento en que venían funcionarios de Buenos Aires [. . .] Pero [. . .] nunca lo hable el tema. Es más, eso creo que por ahí uno quiere . . . como una posibilidad de no enojarse ni llorar, olvidarlo, porque duele muchísimo: tanta lucha y al final perdimos. (P., dirigente piquetero y ex trabajador de YPF, entrevista del autor, Mosconi, diciembre de 2008).

El lógico deseo de alejarse de experiencias dolorosas, combinado con la falta de investigaciones empíricas sobre el tema, beneficiaron la versión de un pasado donde la conflictividad social está ausente. El caso es que al hurgar sobre el tema, no sólo aparecen las luchas, sino que en casos como este, su carácter se revela sumamente combativo. La acción a la que me acabo de referir no es un hecho aislado. Poco después del corte de pista del aeropuerto de Mosconi, en junio de 1988, se produjo una protesta significativa: fue bloqueada la ruta nacional N° 34, la misma que luego se transformó en el escenario central de las puebladas.²³ En ese momento se estaba llevando adelante una importante huelga docente en toda la provincia; los trabajadores de la educación impulsaron asambleas en las que participaron alumnos y padres, y votaron un apoyo activo a la huelga mediante el corte la ruta a la altura de Tartagal y la vecina localidad de Aguaray (*Prensa Obrera* 1988b).²⁴ Si bien los cortes fueron dispersados por la gendarmería y la policía y no se prolongaron demasiado, el método fue retomado tres años después, en el contexto de la lucha contra la privatización de la petrolera estatal impulsada por el gobierno de Carlos Menem.

Después de varios meses de realizar distintas protestas masivas, el 11 de septiembre de 1991 una asamblea de alrededor de cinco mil personas resolvió cortar la ruta nacional N° 34 a la altura de Mosconi y de Aguaray, donde se encuentra la destilería de Campo Durán, para rechazar la privatización de YPF (*Prensa Obrera* 1991). De ese modo se inició la que parece haber sido la primera pueblada en contra de las políticas neoliberales en todo el país. Desde el principio, el corte evidenció un importante nivel de autoorganización, que reflejó la experiencia de lucha acumulada a lo largo de los años. Uno de sus dirigentes recuerda:

Salió . . . mirá, José, no te miento, y preguntale a los changos, llegamos a la ruta ¡ya estaba cortada la ruta! ya habían aparecido las motosierras, las hachas, ya estaban las ramas encima de la ruta, ya estaban abriendo cubiertas, había un camión de YPF, le estaban sacando gasoil el chango habían traído gasoil del tanque de combustible del camión, así que pongan los tachos, ya estaban los tachos, ya estaba todo, corte en la ruta (L., ex trabajador de YPF y dirigente de la lucha contra la privatización de esa empresa, entrevista del autor, Mosconi, diciembre de 2008).

La ruta permaneció cortada toda la noche. Desde la mañana del día 12 de septiembre, la población de la zona comenzó a volcarse a la ruta.

23. La ruta nacional N° 34 es el principal medio de comunicación terrestre con la vecina República de Bolivia. Eso, y el hecho de que es utilizada para el transporte de distintos hidrocarburos que se producen en la zona, le otorga un carácter estratégico.

24. Aguaray es una localidad menor ubicada a pocos kilómetros al norte de Tartagal.

La adhesión de las comunidades Tartagal y de Mosconi fue masiva. En ambas localidades, y en las demás de la zona, se produjo un cierre total de los comercios en apoyo a la protesta (*El Tribuno* 1991). A esa altura, el corte se había convertido en una verdadera pueblada. En la misma ruta se realizó una asamblea que reunió miles de personas,²⁵ y se pronunció por la continuidad del corte. Mientras tanto, se produjo el arribo de tropas de la Gendarmería Nacional con instrucciones de desalojar la ruta. El corte se levantó después de veinticuatro horas de haberse iniciado, luego de tensas negociaciones. Así, la pueblada fue desactivada, y la privatización de YPF se terminó de consumir. Pero los acontecimientos de septiembre de 1991 constituyen un importante antecedente que resultó una influencia central en el estallido de la pueblada más conocida, de 1997.

En 1991, y también en 1988, se desarrollaron ampliamente los formatos de protesta (corte de ruta) y de organización (Asamblea Popular) que fueron considerados nuevos en 1996 y 1997, por lo que resulta difícil negar que estas experiencias previas aportaron elementos para el desarrollo de las luchas más recientes. Ahora bien: las protestas de la segunda mitad de la década de 1990, en cuyo marco se puede registrar la emergencia del movimiento piquetero, alcanzaron una dimensión inusitada, aún considerando estos antecedentes. A fin de explicar esa nueva dimensión, es preciso considerar el impacto de las contrarreformas neoliberales, pero también la incorporación activa a los procesos de lucha de un amplio contingente de trabajadores informales, sin antecedentes previos de organización.

En este sentido, cabe distinguir a los dirigentes de las agrupaciones de desocupados que intervinieron a partir de 1997, en su mayoría activistas con experiencia sindical y trabajadores o ex trabajadores estatales, de sus bases. Los primeros pertenecieron al sector de la clase obrera de la zona que tenía acceso a los derechos sociales en la etapa previa a las contrarreformas neoliberales, contaban con una dilatada experiencia de organización y de luchas, y las condiciones de vida que comenzaron a experimentar algunos años después de la privatización de YPF les resultaron inaceptables. Por el contrario, las bases de las organizaciones eran mayoritariamente trabajadores informales de larga data (Benclowicz 2011), sometidos, como se vio en los primeros apartados de este trabajo, a severas condiciones de existencia. Así, es posible pensar que la influencia de los activistas estatales favoreció la visualización por parte de los sectores históricamente superexplotados de las condiciones de opresión a la que estaban sometidos, y su integración al movimiento piquetero. Esto contribuyó a darle a este último un carácter masivo y novedoso, aunque no en el

25. Según *Prensa Obrera* (1991) se reunieron diez mil personas; según *El Tribuno* (1991), cuatro mil; según algunos entrevistados, cerca de nueve mil.

sentido asignado habitualmente. Su novedad reside en el hecho de que se constituyó como un nuevo ámbito de sociabilidad en el que participaron nuevos contingentes de la clase obrera, conjugando la creatividad del presente con la experiencia del pasado.

Desde este punto de vista, el denominado “fin de la sociedad salarial” no produjo únicamente procesos de descolectivización, como sugieren distintos autores (véase, por ejemplo, Castel 1997). El impacto de la desocupación entre los sectores insertos previamente en relaciones laborales estables no hizo desaparecer de un momento a otro sus tradiciones organizativas, lo cual resulta lógico si se tiene presente el habitual desfase de las transformaciones culturales con respecto a las económicas y políticas. En el mediano plazo, el desempleo masivo mas bien sentó las bases de una ampliación de esas tradiciones sobre sectores que no habían formado parte de la sociedad salarial y por lo tanto no habían integrado el movimiento obrero ni compartido sus experiencias de lucha.

Así, si bien el movimiento obrero tradicional fue claramente afectado por las contrarreformas neoliberales, el movimiento piquetero implica un ensanchamiento en la organización de la clase obrera de la zona bajo estudio —y aunque deba confirmarse en futuros trabajos, probablemente de la clase obrera de todo el país. Este proceso es identificable si primero se visualiza la vasta existencia de trabajadores superexplotados de larga data, y como consecuencia, la inexistencia de un estado benefactor. Una vez reconocido este punto, se podrá ver un rasgo trascendente del movimiento piquetero desde el punto de vista histórico: la participación de amplios contingentes de trabajadores que habían permanecido al margen del movimiento obrero, bajo el liderazgo de dirigentes provistos de un conjunto de conocimientos y capacidades organizativas adquiridos en el curso de sus experiencias políticas, gremiales y de lucha,²⁶ que no dejaron de hacer valer a pesar de haber sido expulsados del mercado de trabajo formal y de los sindicatos a los que pertenecían.

PALABRAS FINALES

En este trabajo se muestra, primero, que la existencia de un estado de bienestar en Tartagal y Mosconi antes de las contrarreformas neoliberales no es más que un mito. Si bien la mayor parte de los trabajadores estatales accedieron a los derechos sociales que se extendieron a partir del primer gobierno peronista, y los ypefianos en particular conquistaron importan-

26. Entre los que se encuentran la capacidad de organizar un piquete o una marcha, de elaborar un petitorio o un discurso y de intervenir y dirigir una asamblea, que en este caso es puesto al servicio de la organización de los desocupados. Véase Benclowicz (2011) para ampliar este punto.

tes beneficios, la presencia de un sector mayoritario de trabajadores precarios que no logran satisfacer sus necesidades básicas, indica el desarrollo de tendencias opuestas.

Esta constatación resulta especialmente interesante si se tiene en cuenta que las relaciones sociales propiciadas por YPF antes de su privatización en las regiones en las que operaba han sido consideradas por distintos autores el modelo por excelencia del estado benefactor argentino. Su inexistencia invita a estudiar con mayor profundidad el contexto de la emergencia del movimiento piquetero en otras regiones del país en particular y los alcances del proceso de redistribución propiciado en la primera etapa peronista a nivel nacional.

La identificación de este rasgo central de la estructura social, que había pasado inadvertido hasta el momento, resulta fundamental para pensar el desarrollo del movimiento piquetero, porque en él convergen ambos sectores de la clase obrera, y sus características son, en buena medida, el resultado de esa convergencia. Las contrarreformas neoliberales quebraron en poco tiempo la tradicional polarización social de los trabajadores de la zona, pero las diferencias culturales y las experiencias políticas preexistentes no se desvanecieron. En el caso estudiado —y presumiblemente, también en muchos otros— no fue sólo la velocidad de la transformación económica la que llevó a distintos sujetos que habían logrado acceder a los derechos sociales en la etapa previa, a encabezar el movimiento piquetero, sino también su nutrida experiencia de lucha y de activismo.

Esa experiencia, volcada luego a la organización de los desocupados, alentó la participación de numerosos trabajadores que habían permanecido al margen del empleo formal y de la lucha sindical. Sobre esto último, señalé que el movimiento piquetero implicó el desarrollo de una novedad significativa, en la medida en que incorporó a amplios sectores de trabajadores informales y superexplotados, que habían permanecido al margen de las organizaciones de la clase obrera.

En cambio, procuré mostrar que no se registraron novedades significativas con respecto a las formas de organización y lucha, que se pueden ubicar en una línea de continuidad con los métodos utilizados por la clase obrera de la zona. Éstos últimos forman parte de una cultura compartida, visualizable a través de las historias militantes de los dirigentes piqueteros que participaron tanto de unas como de otras. El corte de pista del aeropuerto y las protestas contra la política petrolera del alfonsinismo, los cortes de ruta de 1988 y las huelgas docentes, la pueblada contra la privatización de YPF en 1991, forman parte de una tradición de luchas que alimentó protestas posteriores. Más allá de los elementos propios del contexto de la segunda mitad de la década de 1990, las rebeliones populares de Tartagal y Mosconi hunden sus raíces en la propia historia de las comunidades.

REFERENCIAS

- Aguilar, María Ángela, y Estela Vázquez
 1998 "Flexibilización salvaje en la selva chaco-oranense: El caso de Orán y Tartagal (Salta)." *Realidad Económica* 153: 36–57.
- 2000 "De YPF a la ruta: Un acercamiento a Tartagal". En *Trabajo y población en el Noroeste argentino*, editado por Marta Panaia, Susana Aparicio y Carlos Zurita, 327–345. Buenos Aires: La Colmena.
- Alcañiz, Isabella, y Melissa Scheier
 2007 "New Social Movements with Old Party Politics: The MTL Piqueteros and the Communist Party in Argentina". *Latin American Perspectives* 34 (2): 157–171.
- Andujar, Andrea
 2007 "Mujeres piqueteras en Salta: Experiencias y rebeldías". *Encrucijadas* 40, Universidad de Buenos Aires (capturado el 5 de enero 2009 en <http://www.uba.ar/encrucijadas/40/sumario/enc40-piqueteras.php>).
- Antonelli, Eduardo
 1996 "La política económica en Salta en el período 1988–1991". *Castañares: Cuadernos del Instituto de Investigaciones Económicas* 8 (4): 1–53, Universidad Nacional de Salta.
- Antonelli, Eduardo, y María Dolores Laronte
 1995 "La política económica en Salta en el período 1984–1987". *Castañares: Cuadernos del Instituto de Investigaciones Económicas* 5 (3): 1–59, Universidad Nacional de Salta.
- Auyero, Javier
 2002 "La vida en un piquete: Biografía y protesta en el sur argentino". *Apuntes de Investigación del Centro de Estudios en Cultura y Política* 8: 15–37.
- Barbetta, Pablo, y Karina Bidaseca
 2004 "Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001: 'Piquete y cacerola, la lucha es una sola': Emergencia discursiva o nueva subjetividad?". *Revista Argentina de Sociología* 2 (2): 67–88.
- Barbetta, Pablo, y Pablo Lapegna
 2001 "Cuando la protesta toma forma: Los cortes de ruta en el norte salteño". En *La protesta social en la Argentina: Transformaciones económicas y crisis social*, editado por Norma Giarraca, 231–258. Buenos Aires: Alianza.
- Benclowicz, José Daniel
 2010 "La lucha contra la privatización de YPF en Tartagal y Mosconi: 1988–1991". *Trabajo y Sociedad* 15 (14): 93–110.
- 2011 "Continuities, Scope and Limitations of the Argentine Piquetero Movement". *Latin American Perspectives* 38 (1): 74–87.
- Benítez Larghi, Sebastián, y Ignacio Sabbatella
 2006 "Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi: Unos desocupados muy ocupados" (capturado el 5 de enero de 2009 en <http://www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=11842>).
- Bonnet, Alberto
 2007 *La hegemonía menemista*. Buenos Aires: Prometeo.
- Cafferata, Agustín
 1988 *Área de frontera de Tartagal*. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones.
- Cámara de Diputados de Salta
 1973 *Libro de sesiones*. Salta: Cámara de Diputados de Salta.
- Castel, Robert
 1997 *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós.
- Córdoba, Rossana T.
 2004 "De piquetes y otras historias". *Cuadernos de Humanidades* 15: 141–152, Universidad Nacional de Salta.
- Dinerstein, Ana, Daniel Contartese y Melina Deledicque
 2008 "Notas de investigación sobre la innovación organizacional en entidades de trabajadores desocupados en Argentina". *Realidad Económica* 234: 50–79.

- Dirección General de Estadísticas de Salta
 1997 *Encuesta provincial de índices de desocupación y condiciones laborales*. Salta: Dirección General de Estadísticas de Salta.
- Doyon, Louise
 1977 "Conflictos obreros durante el régimen peronista: 1946–1955". *Desarrollo Económico* 67 (17): 437–473.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
 1980 *Censo Nacional de Población y Vivienda*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
 1991 *Censo Nacional de Población y Vivienda*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
 1997 *Encuesta Permanente de Hogares*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
 2001 *Censo Nacional de Población y Vivienda*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- Lucita, Eduardo
 2001 "Cortando rutas, abriendo nuevos senderos: Desocupados, ocupados, 'piqueteros', viejas y nuevas formas de lucha". *Cuadernos del Sur* 32: 79–93.
- Maceira, Verónica, y Ricardo Spatalberg
 2001 "Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en la Argentina". *Observatorio Social de América Latina* 5: 23–28.
- Marini, Ruy Mauro
 1991 *Dialéctica de la dependencia*. México, D.F.: Era.
- Márquez, Vito Francisco
 2004 "Necesitar y depender para asegurar la supervivencia". *Cuadernos de Humanidades* 15: 63–72, Universidad Nacional de Salta.
- Oviedo, Luis
 2001 *Una historia del movimiento piquetero*. Buenos Aires: Rumbos.
- Pereyra, Sebastián
 2006 "¿De las acciones de lucha a los proyectos productivos? La experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados de General E. Mosconi en la Provincia de Salta". *Cuadernos de CLASPO-Argentina* 19: 1–38, Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Ponce, Aldo
 2006 "Unemployment and Clientelism: The Piqueteros of Argentina". *Munich Personal RePEc Archive* (capturado el 5 de enero de 2009 en <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4475/>).
- Prensa Obrera*
 1988a "Hagamos como los trabajadores de SUPE", 23 de junio.
 1988b "Desde Mosconi, Tartagal y Aguaray", 7 de julio.
 1991 "Contra la entrega de YPF: Pueblada en el norte de Salta", 19 de septiembre.
- Presidencia de la Nación
 1985 *Boletín oficial de la República Argentina*, 9 de agosto.
 1987a *Boletín oficial de la República Argentina*, 13 de noviembre.
 1987b *Boletín oficial de la República Argentina*, 26 de noviembre.
- Rosanvallon, Pierre
 2007 *La nueva cuestión social: Repensar el estado-providencia*. Buenos Aires: Manantial.
- Schaumburg, Heicke
 2004 "Imaginaris generacionales de lucha y trabajo en Gral. E. Mosconi, Salta", ponencia presentada en las *II Jornadas de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas*, Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Solberg, Carl E.
 1986 *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- Svampa, Maristella, y Sebastián Pereyra
 2003 *Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

Tarrow, Sidney

1997 *Poder en movimiento*. Madrid: Alianza.

Thompson, Edward P.

1989 *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Barcelona: Crítica.

Torrado, Susana

1994 *Estructura social de la Argentina 1945–1983*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

El Tribuno

1961 “SUPE: Fue normal la huelga en Vespucio”, 10 de noviembre.

1988 “General Mosconi: Protesta de trabajadores petroleros”, 19 de junio.

1991 “Levantaron el corte de rutas”, 13 de septiembre.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

1938a *Boletín de informaciones petroleras* 164.

1938b *Boletín de informaciones petroleras* 172.

1939 *Boletín de informaciones petroleras* 181.